



# Escuelas seguras

El prolongado conflicto en Colombia continúa afectando el derecho a la educación. Los centros educativos siguen siendo objeto de ataques. Los grupos armados las usan como campamentos temporales e impiden la práctica educativa; los caminos para llegar a ellas están siendo minados, y las instituciones son en ocasiones un escenario de propaganda y reclutamiento en lugar de un entorno protector. Maestros que tratan de impedir estas situaciones tienen que huir cuando son amenazados. La educación es suspendida como consecuencia del fuego cruzado y de los desplazamientos masivos.

El esfuerzo institucional que Colombia ha realizado para mejorar la educación en áreas afectadas por el conflicto es enorme, pero no es suficiente. La reactivación del conflicto requiere que el gobierno adopte nuevas medidas que garanticen el derecho a la educación. Según el informe "Children and armed conflict"<sup>1</sup> del año 2018, en el que se hace seguimiento a la Resolución 1612, en el año 2018 hubo un aumento en el número de ataques contra las escuelas (13 eventos), respecto al año inmediatamente anterior (no hubo eventos registrados).

Según la información recolectada por el Consejo Noruego para Refugiados<sup>2</sup>, entre enero y agosto del presente año, más de 10.800 niños y niñas y

646 docentes se vieron afectados por algún tipo de evento que puso en peligro su vida en el centro educativo o de camino a la escuela. El 91 por ciento de los eventos reportados ocurrieron alrededor y/o camino a la escuela y en 3 de cada 10 casos<sup>3</sup>, se cancelaron temporalmente las clases durante 3 días en promedio.

La utilización de minas antipersonal en caminos que conducen a los centros educativos son preocupantes. 20 eventos fueron registrados durante este periodo. Las instituciones educativas, también han quedado en medio del fuego cruzado, más de 16 eventos fueron reportados en el periodo de este reporte. El número de estudiantes y profesores afectados como consecuencia del fuego cruzado es alarmante y preocupante.

2.193 estudiantes de los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Meta y Norte de Santander como consecuencia del fuego cruzado y 2.515 estudiantes vieron afectados, de manera directa o indirecta, en los departamentos de Arauca, Cauca, Chocó, Meta y Norte de Santander como consecuencia de la utilización de minas antipersonal, municiones sin explosionar y trampas explosivas.

Si comparamos esta información con el informe "Children and armed conflict" del año 2018, hay tres departamentos que se repiten si se compara

<sup>1</sup> <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1918624.pdf>

<sup>2</sup> La información que será presentada en este informe no cubre el 100% del territorio colombiano (solo aquellos departamentos en los que el Consejo Noruego para Refugiados tiene presencia: Antioquia, Arauca, Atlántico, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de

Santander, Santander, Valle del Cauca) ni todas las instituciones educativas. Esto implica que esta información, en términos de ubicación geográfica, representan el 56% del país. Por esto, la información mostrada es un ejemplo de lo que sucede, pero no es una muestra representativa de la población afectada.

<sup>3</sup> En el 10% de los eventos registrados no hay información sobre cancelación de clases.

con la información anterior: Arauca, Chocó y Norte de Santander<sup>4</sup>.

Hay zonas de difícil acceso que siguen siendo especialmente afectadas en estos contextos. En el municipio de Bojayá, Chocó el día 4 de marzo de 2019, 995 estudiantes fueron afectados como consecuencia del fuego cruzado y la contaminación del territorio con minas antipersonales, municiones sin explotar y trampas explosivas. En esta zona del país, desde inicios de 2019 se reportaron confrontaciones armadas entre al menos tres grupos armados, afectando a comunidades indígenas y afrocolombianas. En este departamento se siguen reportando confinamientos, amenazas a líderes comunitarios y riesgo de desplazamientos masivos, específicamente de las comunidades de los ríos Opogado (Playita, Villa Hermosa, Unión Vaquiza y Egorquera). En la fecha que se escribe este texto, en el departamento del Chocó se habían presentado 11 desplazamientos masivos afectando a más de 4.100 personas. Cada vez que las comunidades se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto los estudiantes interrumpen o suspenden la educación. En algunos casos volver al sistema educativo puede tardar años.

En Arauca, en el municipio de Arauquita, el día 26 de marzo cuando se realizó el proceso de desactivación de una mina en la huerta de una institución educativa -con la presencia de fuerza pública, los estudiantes se encontraban al interior del colegio. Sin previo aviso; el impacto sonó inesperadamente generando alteración y nerviosismo dentro de la comunidad educativa. Después de la detonación, hubo un ataque por parte de los grupos armados alrededor de la institución educativa poniendo, nuevamente, en riesgo a estudiantes y trabajadores de la institución. Días antes, en la misma institución, el 13 de marzo, se había presentado un hostigamiento durante la jornada escolar en horas de la mañana, donde los estudiantes pudieron observar parte del enfrentamiento cerca de los salones de clase. Si bien este último evento no provocó la suspensión total de las clases, si se postergaron las lecciones de agropecuaria.

En el departamento Meta, municipio de Uribe, hay 509 estudiantes matriculados en las jornadas diurna y nocturna y en el internado mixto. Hace

dos años, al lado del centro educativo se detectó un artefacto explosivo que a la fecha no se ha desactivado. En este momento el artefacto se encuentra cercado con una malla improvisada instalada por la comunidad educativa y señalizada en algunos árboles con tela de color rojo. Al igual que en los casos mencionados, esto no solo pone en peligro a estudiantes y al personal educativo, sino que también afecta el libre desarrollo de las actividades que se llevan a cabo al interior de la institución.

En 7 de cada 10<sup>5</sup> casos que se evidenciaron durante este periodo de tiempo todavía se requiere de una respuesta o asistencia humanitaria. En varios casos es necesaria la desactivación de artefactos explosivos, realización de diagnósticos, adecuación, reparación o reubicación de sedes educativas para prevenir que queden atrapadas en medios de los fuegos cruzados o los hostigamientos. Adicionalmente, hay estudiantes y trabajadores que requieren atención psicosocial, ayuda alimentaria, educación en riesgo de minas y materiales pedagógicos.

<sup>4</sup> El informe también menciona Nariño y Valle del Cauca.

<sup>5</sup> En el 9% de los casos no se sabe si todavía hay algún tipo de respuesta que se pueda brindar.

- Las graves violaciones a la educación pueden tener un efecto devastador en el futuro de los menores de edad. Es necesario que el gobierno de Colombia garantice la educación y brinde esperanza a niños, niñas y jóvenes en todos los rincones del país. Para que el gobierno cumpla con esta labor el Consejo Noruego para Refugiados recomienda al Gobierno:
  1. Adherir a la declaración de Escuelas Seguras e implementar las recomendaciones para mejorar el monitoreo y reporte de violaciones; hacer cumplir las medidas programáticas para la prevención y protección de las escuelas, y restringir del uso militar y la ocupación de las escuelas.
  2. Dar a conocer los beneficios de la educación, su contribución a la protección de la niñez y su importancia para el disfrute de otros derechos básicos. Además, ayuda a eliminar los riesgos sociales para las comunidades y salvaguarda el futuro de generaciones enteras de NNA.
  3. Mejorar y expandir los servicios educativos en áreas afectadas por el conflicto para contribuir con la estabilización de estas comunidades en el corto plazo. Esto le permitiría al Estado colombiano ofrecer un rápido dividendo de paz con potencial de generar cambios reales.